REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL

Purificación, Veintiséis (26) de Marzo de dos mil veintiuno (2021).

Ref.: ACCION DE TUTELA Rad: 73-585-40-89-001-2021 – 00021-00. R.I. 6478
Accionante: ANA VICTORIA RODRIGUEZ POLOCHE, en representación de su menor hijo
SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ
Accionada: COMPARTA, EPS-S.

ASUNTO.

Al despacho para decidir la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

La señora **ANA VICTORIA RODRIGUEZ POLOCHE**, en representación de su menor hijo **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, instaura acción de tutela en contra **COMPARTA EPS-S**, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, que considera vulnerados por parte de la EPS mencionada, conforme a la siguiente situación fáctica.

HECHOS

Sostiene la accionante que, el niño **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, identificado con R.C No. 1.10.466706 ha sido diagnosticado según el historial clínico de leucemia linfoblástica aguda con fractura vertebral. Que esta patología severa requiere de los cuidados y tratamientos de servicio de salud y tratamientos médicos integrales constantes y necesarios para su normal desarrollo de su mínimo vital y vida digna.; encontrándose afiliado a COMPARTA E.P.S.- S en régimen subsidiado.

Indica que, dichos tratamientos y cuidados médicos requieren de constante desplazamiento y transporte a la ciudad de Ibagué, siendo costosos, por lo que solicita a la E.P.S.-S COMPARTA, que el servicio médico se realice y preste a su hijo en forma integral toda vez que es una persona desempleada y no cuenta con recursos fijos y suficientes para sufragar los gastos de su hijo., siéndole difícil pagar gastos de transporte de Purificación a Ibagué y así mismo la estadía en la ciudad de Ibagué.

PRETENSIONES DE LA ACCIONANTE

Solicita que se tutele los derechos fundamentales a la salud y a una vida digna, invocados como amenazados y violados y/o vulnerados, por parte de la EPSS COMPARTA, por cuanto no cuenta con los medios económicos para asumir estos costosos desplazamientos, gastos de estadía en la ciudad de Ibagué, que requiere su menor hijo Santi Esteban Ortiz Rodríguez para el desarrollo y cuidado de su mínimo vital.

TRÁMITE PROCESAL

Admitida la tutela el día 17 de marzo de 2021, se ordenó la notificación al Representante Legal **COMPARTA EPS-S**, y se ordenó vincular a **LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LA VINCULADA

Respuesta accionada COMPARTA EPS-S

FABIO JOSE SANCHEZ PACHECO, en calidad de representante legal judicial de tutela de la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiado Comparta E.P.S-S en su respuesta a ésta acción Constitucional manifiesta:

(...) 2. Señor Juez, en primer lugar en cuanto a la solicitud de reconocer la atención integral a favor del menor es importante manifestar al despacho que COMPARTA EPS-S no ha negado la prestación a los servicios de salud ni el acceso a los mismos, pues como bien se evidencia en la lectura de la acción de tutela que se han autorizados todos y cada uno de los servicios que le han sido ordenados al menor y los mismos se han programado, no obstante por la especialidad de los mismos nos hemos visto en la necesidad de autorizarlos en IPS que se encuentran ubicadas en la ciudad de Ibagué..

Sin embargo, nunca se ha negado los servicios de salud a favor del usuario, pues la presente acción de tutela se originó por falta de recursos por parte del representado y su familia para el pago del transporte y no la falta de programación o autorización de citas, por lo cual, y de manera muy respetuosa se solicita al despacho no acceder a la solicitud de atención integral, porque la accionante no logra demostrar que COMPARTA EPS-S haya faltado a sus deberes para con el usuario.

3. Ahora bien, respecto a la solicitud de transporte ambulatorio (intermunicipal), me permito indicar su Señoría, que nuestra entidad le garantiza este servicio tan solo al paciente, toda vez que el municipio de PURIFICACION TOLIMA donde se encuentra zonificada el usuario cuenta con UPC adicional por dispersión geográfica (resolución 2503 de 2020) ante el cual el usuario debe acercarse a la oficina de la E.P.S-S a solicitar el transporte con los documentos que certifiquen su traslado.”

(..) El artículo 122 de la Resolución 3512 de 2019, consagra en relación con el transporte ambulatorio:

“TRANSPORTE PACIENTE AMBULATORIO. El servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia para acceder a una atención financiada con recursos de la UPC, no disponible en el lugar de residencia del afiliado, será financiado en los municipios o corregimientos con la prima adicional para zona especial por dispersión geográfica”.

4. Debe señalarse al operador judicial que en lo que tiene que ver con los servicios complementarios de alojamiento y alimentación, su garantía no corresponde de manera alguna a COMPARTA EPS-S, toda vez que no

se trata de atenciones que estén relacionadas con la prestación de servicios de salud, sino que se clasifican como servicios de carácter social que debe cubrir el ente territorial en el que se encuentra zonificado el usuario.

Lo anterior se soporta, entre otras disposiciones, en los conceptos No. 201934100364671 y No. 202034200585041, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en fechas 26 de marzo de 2019 y 26 de abril del año en curso, respectivamente, mediante los que la referida entidad, sobre la obligatoriedad del ente territorial de asumir los costos generados de servicios sociales como alojamiento y alimentación, indicó lo siguiente:

“Por lo anterior, servicios sociales como son los- sic- el alojamiento y la alimentación, para pacientes afiliados al Régimen Subsidiado que no hagan parte de aquellos afiliados a una EPS I como lo establece el precitado artículo 127 de la Resolución 5857 de 2018, deberán ser garantizados por parte del Ente Territorial con recursos que tengan establecidos para prestaciones sociales de este tipo y no es procedente su prescripción a través de la herramienta tecnológica de Mi pres.”.

“Se reitera que los servicios sociales de alojamiento y manutención para quien deba trasladarse con el fin de acceder a un servicio de salud no son financiados con recursos del sistema de salud, a menos que sea un afiliado a una EPS indígena. Estos servicios deben ser garantizados por el Ente Territorial con los recursos asignados por el Sistema General de Participaciones, de acuerdo con las disposiciones del Conpes Social y la Ley 715 de 2001 en su componente de participación de propósito general”.

En ese orden de ideas, su señoría corresponde brindar el apoyo social y garantizar al agenciado y su acompañante servicios de alojamiento y alimentación (si así lo requieren), al municipio de Paipa a través de la Secretaría de Desarrollo Social o la que haga sus veces, en conjunto con el ente territorial a nivel departamental, teniendo estos la obligación legal de brindar al usuario el servicio que está solicitando mediante la presente acción de tutela; por lo que considera pertinente el suscrito solicitarle a su honorable despacho judicial proceda a vincular en la presente acción constitucional a la Alcaldía de purificación y a la Gobernación de Tolima.

Además, en lo relacionado con la solicitud específica de alimentación, me permito indicar que la misma resulta improcedente y que generar su reconocimiento no tendría relación alguna con la protección a derechos fundamentales, que es el fin último de este trámite constitucional, teniendo en cuenta que la alimentación no es un gasto imprevisto para el accionante, por el contrario, es una necesidad que debe suplir el agenciado sea purificación o en cualquier otra municipalidad, independientemente de si requiere prestación de servicios médicos o no, debiendo suplirse la misma en forma diaria independientemente de la ubicación del accionante y de su acompañante.

Continuando con lo concerniente al servicio de transporte, me permito manifestar que el Juez constitucional tiene la obligación de efectuar un análisis minucioso para determinar si efectivamente este servicio debe ser brindado en favor del usuario, atendiendo a la imposibilidad económica

de poder sufragar por sí mismo los gastos de transporte y alojamiento en lugar diferente al municipio de su residencia, teniendo la obligación de acreditar esta condición, no siendo suficiente la mera manifestación de que no cuenta con recursos económicos para asumirlos; la Corte Constitucional ha determinado que el operador judicial debe observar más allá de las meras afirmaciones que hacen los accionante en los escritos de acción de tutela en lo que respecta a la capacidad económica con la que cuenta para asumir gastos de transporte o alojamiento, así la referida Corporación, en sentencia T-069 de 2018, en la que actuó como ponente el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, sobre la observancia y examen que debe realizarse para determinar la incapacidad económica de un usuario,

(....)

Con fundamento en las razones expuestas a su señoría en el acápite de consideraciones, solicito de manera respetuosa:

- Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la ANA VICTORIA RODRIGUEZ POLOCHE en representación de SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ contra COMPARTA EPS-S, o en su defecto, desvincular a COMPARTA EPS-S toda vez que al usuario le han sido autorizados y garantizados los servicios que ha requerido de acuerdo con nuestras competencias; no obstante, la EPS-S no es la responsable de la prestación de los demás servicios solicitados (transporte y alojamiento), mediante la presente acción de tutela por tratarse de eventos no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (NO PBS), de conformidad con lo contenido en la Resolución 2481 de 2020.*

- Se vincule a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PURIFICACIÓN y a la GOBERNACIÓN DE TOLIMA a la presente acción y se les ordene garantizar en favor del agenciado alojamiento y alimentación cuando así los requiera para la asistencia a servicios de salud, por ser estas las entidades legalmente obligadas a brindar en favor del accionante los servicios de carácter social que está solicitando, de acuerdo con las consideraciones expuesta en el presente documento.*

- De ser procedente la acción de tutela, se autorice a COMPARTA EPS-S para, solicitar el financiamiento de la totalidad de los gastos en que incurra en cumplimiento del fallo de tutela, respecto a servicios y tecnologías que se encuentren por fuera del Plan de Beneficios en Salud, ante la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, para que estos sean reconocidos y tenidos en cuenta en el momento de conformar los presupuestos techo, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones 205 y 206 de 2020..*

Respuesta de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL (VINCULADA)

La secretaria de salud departamental manifiesta: “Es de conocimiento del juzgado, que la población que no tiene ningún tipo de aseguramiento conforme a lo contemplado en el art 157 de 1993 de la ley 100 de 1993, se encuentra a cargo del departamento del Tolima todos los procedimientos ,

exámenes y servicios de salud que requiere la población pobre sin capacidad de pago; sin embargo en caso de poseer subsidiada al momento de ser SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ de acuerdo a la base de datos de ADRES y RUAF , esta persona se encuentra asegurada a comparta EPS.”

Trayendo a colación el art 12 de la resolución N.6408 de 2016, ley 1955 de 2019 art 231, ley 100 art. 178, resolución 6408 de 2016 art 126, 127. Bajo este soporte jurídico manifiesta que el menor SANTI ESTEBAN RODRIGUEZ no hace parte de la población pobre no asegurada (PPNA).

Indica que es competencia del municipio la entrega del insumo solicitado, razón por la cual solicita se vincule a la Secretaria de Desarrollo social o secretaria de planeación y secretaria o dirección local de salud municipal, adscritas a la Alcaldía municipal de Ibagué Tolima, para que al tenor de sus competencias adelanten lo pertinente del caso. Es de conocimiento del juzgado que las EPS son entidades particulares, sociedades comerciales, que prestan un servicio público que hacen parte del SGSSS regulada por el art. 177 y siguiente de la ley 100 de 1993, y el decreto 1485 de 1994, por tanto, la secretaria de salud departamental no es el superior jerárquico de la EPS y EPS-S, como también la IPS.

Solicita no se impute responsabilidad a la SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA y por consiguiente se desvincule de la acción constitucional, toda vez que es a COMPARTA EPS a quien le corresponde la atención integral. Concluyendo que no se ha vulnerado los derechos fundamentales a la accionante.

DE LA LEGITIMACIÓN

Por activa

El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a cualquier persona para promover acción de tutela contra una autoridad pública o un particular en los casos permitidos por la ley, cuando se amenacen o vulneren derechos fundamentales.

A su turno, el art. 10 del decreto 2591 e 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, regula entre otros, el tema de la legitimación en la causa y el interés para actuar en este tipo de acciones, el presente caso, la accionante, la señor **ANA VICTORIA RODRIGUEZ POLOCHE** presentó acción de tutela manifestando que actúa a favor de los derechos su menor hijo **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, quien, por su condición de madre y por ser su hijo menor de edad , se encuentra legitimada para incoar la presente acción Constitucional.

Por pasiva

Respecto de la legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental.

El artículo 42 del decreto 2591 de 1991, establece La PROCEDENCIA de la acción de tutela por acciones u omisiones de los particulares y en su numeral 2 dice: “2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud “. En este caso, COMPARTA E.PS-S es una entidad particular, pero está encargada de prestar servicios de salud, por lo cual está llamada a responder por la amenaza o la vulneración del derecho fundamental invocado por la accionante.

CONSIDERACIONES

Resulta de medular importancia resaltar en este caso que, **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, tiene una edad de apenas 15 años, (nacido el 12 de octubre de 2005), según copia de tarjeta de identidad que obra en el expediente.

De otra parte, según copia de la historia clínica, (folio 5-8) acompañada con el escrito de tutela, expedida por El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué - Historia Clínica Oncología – Hematología- dolor, el menor **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, fue diagnosticado por el médico tratante con LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA, fecha de diagnóstico: 14 de septiembre de 2020, ordenándosele el día 10 de febrero de 2021, un plan terapéutico, con la anotación expresa de que el fin del tratamiento es curativo, en una estadificación del cáncer : estadio IV, con la observación: Protocolo total XV Colombia Brzo y ALTO RIESGO POR LA EDAD. Entre los tratamientos ordenados por el médico tratante, se destaca: Quimioterapia poliquimioterapia (ciclo completo de tratamiento alto riesgo) para marzo de 2021.

Según afirma la madre del menor al incoar esta acción Constitucional, se requiere garantizar los costos de desplazamiento del menor para la atención en salud, ante la falta de recursos de la madre, para poder trasladarse a la ciudad de Ibagué y asumir los gastos de alojamiento.

La accionada COMPARTA EPS-S, en su respuesta indica que al menor se le han autorizado todos y cada uno de los servicios que le han sido ordenados y que se han programado, pero que por la especialidad de los mismos se han visto en la necesidad de autorizarlos a la ciudad de Ibagué. Considera el despacho que, aunque no existe prueba de alguna omisión por parte de la accionada respecto de los servicios de salud y tratamientos médicos que se le deben brindar al accionante, si resulta incuestionable que el paciente tiene padecimientos de salud que ameritan una serie de consultas, exámenes e intervenciones médicas o de diagnóstico, que deben realizarse en ciudad o lugar diferente al de su residencia y que implican el desplazamiento del paciente con su acompañante. Lo anterior se evidencia en la serie de consultas realizadas y ordenes de servicios emitidas para instituciones ubicadas en la ciudad de Ibagué, como el Hospital Federico Lleras Acosta.

Pretender que un paciente y su familia, no solo deban soportar los padecimientos propios de una enfermedad, sino también el costo de los viajes y, eventualmente, el hospedaje en una ciudad distinta a su residencia, para someterse a los exámenes y tratamientos, resulta desproporcionado. No es lo mismo acudir a una consulta o practicarse un examen de manera eventual,

cuyo costo bien puede soportar el paciente o su una familia, a predicarse lo mismo cuando el estado de salud requiere un tratamiento permanente, cuyos desplazamientos y hospedaje pueden requerirse de manera persistente o periódica, y cuando, además, las condiciones económicas del núcleo familiar impiden en la realidad ese tratamiento médico.

Ha sostenido la Corte Constitucional que “esta Corporación cuando analiza el reconocimiento de alojamiento y alimentación, toma en cuenta las reglas jurisprudenciales anotadas en el acápite anterior para otorgar el servicio de transporte de los usuarios del SGSSS que requieren trasladarse a una ciudad distinta a la de su residencia para acceder al tratamiento médico prescrito:

(i) La falta de recursos económicos por parte del paciente y sus familiares no les permitan asumir los mismos y (ii) de no prestarse tal servicio se genere un obstáculo que ponga en peligro la vida, la integridad física o el estado de salud del paciente.

Cuando se requieren dichos servicios para un acompañante también se estudia que:

(iii) El paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (iv) requiere atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (vi) ni él ni su núcleo familiar cuentan con los recursos suficientes para financiar el traslado

En el mismo sentido, esta Corte ha establecido que si “la atención médica en el lugar de remisión exigiere más de un día de duración se cubrirán los gastos de alojamiento”. Concluyendo que tanto el transporte como los viáticos serán cubiertos por la prima adicional en áreas donde se reconozca este concepto; sin embargo, en los lugares en los que no se destine dicho rubro se pagarán con la UPC básica.

Así las cosas, cuando se presenta la remisión de un usuario a una institución de salud en una zona geográfica diferente a la de residencia, se deberá analizar si se adecua a los presupuestos estudiados en precedencia, esto es: (i) que el paciente fue remitido a una IPS para recibir una atención médica que no se encuentra disponible en la institución remitora como consecuencia de que la EPS no la haya previsto dentro de su red de servicios, (ii) el paciente y sus familiares carecen de recursos económicos impidiéndoles asumir los servicios y, (iii) que de no prestarse este servicio se genere un obstáculo que ponga en peligro la vida, la integridad física o el estado de salud del paciente.

Estas condiciones justifican el reconocimiento de los gastos de transporte para el **afiliado** y se entienden incluidas en el PBS de conformidad con lo establecido en precedencia.

Ahora bien, aquellas también serán tenidas en cuenta para reconocer los gastos por concepto de viáticos del afiliado, así como los derivados del transporte y alojamiento de su acompañante, a las cuales se suma que “el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas”; bajo el entendido de que el tratamiento legal de estos costos no son idénticos al del transporte del afiliado, en otras palabras, no se comprenden en el PBS.

“el servicio de salud debe ser prestado libre de obstáculos que impidan su acceso, de manera que no solo sean suministrados los servicios de carácter médico, sino que además se cubran los medios que permiten acceder a tales atenciones cuando el paciente se encuentre en especiales situaciones de vulnerabilidad.

En consecuencia, en aquellos casos en los que el paciente requiera de transporte, a fin de recibir el correspondiente tratamiento médico, o como en este caso controles de su patología, en un lugar diferente al de su residencia, la EPS deberá sufragar tales gastos por adecuarse a lo previsto en la Resolución 5269 de 2017.” (**Sentencia T-309/18**)

Además, en Sentencia T-736/16 la Corte Constitucional dijo: “Dentro de los servicios excluidos del POS, se encuentran aquellos relacionados con los gastos de transporte para el paciente, el cual es necesario para acceder a un servicio de salud en un lugar diferente al de su residencia. El trayecto solicitado por los usuarios generalmente es entre el lugar de residencia del paciente y la IPS que le brinda la atención médica, servicio que usualmente carece de una orden médica y que ocasionalmente no han sido solicitadas directamente ante la EPS. Igualmente, se encuentran excluidos del POS los costos de hospedaje y alimentación, en los que incurre el paciente cuando el servicio se presta en un municipio distinto de su domicilio.

6.8. En aquellos eventos en los que una Empresa Promotora de Salud Subsidiada –EPS-S- autoriza un servicio médico en un municipio distinto al de residencia de un paciente, los gastos de transporte deben entenderse como complementarios y la entidad tiene claro que, en principio, el usuario deberá asumir su costo, **pero en el caso del régimen subsidiado el asunto es distinto pues se debe presumir la falta de capacidad de pago de sus afiliados, que previamente fueron identificados por el Gobierno como personas pertenecientes a los niveles de 1 y 2 del SISBEN^l, sin capacidad económica suficiente.** Asistencia que encuentra soporte en el principio de solidaridad sobre el cual se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho. En este sentido, de acuerdo con las normas de competencia que regulan el sistema de seguridad social se ha establecido la cobertura de los servicios no POS, cuando estos sean necesarios para garantizar la salud de los enfermos.

6.9. A propósito del transporte de un paciente ambulatorio del régimen subsidiado, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 5521^l expedida el 27 de diciembre de 2013, determinó en el artículo 12 cuándo procede el pago del transporte y a qué entidad le compete según el caso.

Así las cosas, se reconoce dicho servicio para aquellos afiliados que residan en los municipios incluidos en el listado anexo de la citada resolución; y cuando una Empresa Promotora de Salud Subsidiada -EPSS- que ha sido contratada por un municipio para que atienda su población decide incluir en la red de servicios una Institución Prestadora de Salud -IPS-, en un municipio distinto del lugar al cual fue contratado tiene la obligación de pagar los gastos de transporte de la población que tiene afiliada.

6.10. Igualmente, se previó un mecanismo para reconocer el cobro de los servicios sin cobertura por parte del Ministerio de Salud y de la Protección Social, mediante la Resolución 1479 del 6 de mayo 2015, que reguló el procedimiento para el cobro y pago por parte de las entidades territoriales departamentales y distritales a los prestadores de servicios de salud, por los servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud –POS–, provistas a los afiliados al régimen subsidiado de salud, autorizados por los Comités Técnico Científicos -CTC- u ordenados mediante providencia judicial.

6.11. A fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados al régimen subsidiado de salud, los servicios que no se encuentren incluidos en el POS deberán ser cubiertos por la Secretaría de Salud Departamental, en consecuencia, la Entidad Promotora de Salud procederá a observar el trámite allí establecido para efectuar la correspondiente solicitud de cobro del servicio de transporte terrestre intermunicipal de un paciente ambulatorio.

6.12. Situaciones como las descritas, autorizan al juez constitucional a ordenar a la entidad accionada que asuma el costo del transporte, cuando sea necesario. De esta manera, se eliminan las barreras de acceso al servicio de salud y las cargas desproporcionadas que no debe padecer una persona que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta.”

Descendiendo al caso en concreto, el despacho procede a analizar si se cumplen las reglas establecidas en la Jurisprudencia para otorgar el amparo respecto de los gastos por concepto de transporte y viáticos del menor-paciente, así como de su acompañante.

REGLAS JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL AFILIADO: *(i) La falta de recursos económicos por parte del paciente y sus familiares no les permitan asumir los mismos y (ii) de no prestarse tal servicio se genere un obstáculo que ponga en peligro la vida, la integridad física o el estado de salud del paciente.*

El menor **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, se encuentra afiliado al régimen subsidiado, por lo tanto, tal y como lo ha sostenido la honorable Corte Constitucional **“se debe presumir la falta de capacidad de pago de sus afiliados, que previamente fueron identificados por el Gobierno como personas pertenecientes a los niveles de 1 y 2 del SISBEN”**.

De otra parte, está probado que la atención médica y en general el tratamiento que fue ordenado por la EPS –S, se autorizó para una institución de salud ubicada en una ciudad de Ibagué, en este caso viviendo en el Municipio de Purificación, la EPS-S se le otorgan autorizaciones para ser atendido en la Ciudad de Ibagué, con una distancia por carretera de 98,8 km y una Duración de viaje de 1h 58 min aproximadamente. Resulta claro también que, de no prestarse este tratamiento en la ciudad de Ibagué, se pone el peligro la vida, la integridad física o el estado de salud del paciente, en virtud de las patologías que padece, las cuales se encuentran acreditadas en la historia clínica aportada por la accionante y tal como lo ha sostenido la misma accionada en su respuesta a esta acción Constitucional *“por la especialidad de los mismos nos hemos visto en la necesidad de autorizarlos en IPS que se encuentran ubicadas en la ciudad de Ibagué”*

De otra parte, si bien es cierto la progenitora del menor solicita únicamente para el paciente - menor , los gastos de transporte y viáticos , el despacho considera que, en el evento de otorgarse, también deben ser extendidos a un acompañante, precisamente por la condición de menor de edad del paciente, quien debe estar siempre acompañado por su señora madre o por otro acompañante, teniendo en cuenta, además, las graves complicaciones de salud que padece y el tratamiento (Quimioterapia) que le fue ordenado, encontrándose cumplidas las **REGLAS JURISPRUDENCIALES APLICABLES PARA EL ACOMPAÑANTE**, como son : *(iii) El paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (iv) requiere atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (vi) ni él ni su núcleo familiar cuentan con los recursos suficientes para financiar el traslado*

En relación con el cumplimiento de estas reglas, esta Juez Constitucional encuentra plena prueba para determinar que: *“El paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento”*, pues está plenamente demostrado que se trata de un menor de quince (15) años, lo cual releva de cualquier otra argumentación en este sentido. De igual manera, está probado, tal y como lo refieren las historias clínicas aportadas por la progenitora, pertenecen al Régimen subsidiado, que su madre no cuenta con los recursos suficientes para financiar los traslados que necesite el menor para recibir las atenciones en salud que la misma acciona nada autoriza en lugar diferentes a la residencia del menor.

Por las anteriores razones, este despacho encuentra acreditados las reglas Jurisprudenciales para acceder a que la accionada **COMPARTA EPS-S** deba asumir los gastos de transporte y viáticos (alimentación-hospedaje) del paciente - menor desde el municipio de Purificación (Tolima) hasta la ciudad de Ibagué (Tolima), u otra ciudad diferente a la de su residencia, mientras se supera el diagnóstico establecido por el médico tratante y para que pueda acudir a las consultas y tratamientos que deban realizarse, De igual manera, se cumplen esos mismos presupuestos para acceder a que esos gastos de transporte y viáticos (alimentación- hospedaje) incluyan los del acompañante, por encontrarse acreditado que “El paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento”.

En el escrito de tutela y las pruebas aportadas por la accionante, coinciden con lo afirmado por la accionada, en que al paciente **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, la accionada **COMPARTA EPS-S**, le ha brindado la atención en salud que ha requerido el usuario, realizando consultas con médicos especialistas, autorizando, entregando los medicamentos ordenados y prestando todos los demás servicios de salud que ha requerido hasta la fecha. La verdadera inconformidad de la accionante, según su propio escrito, radica en los costos de desplazamiento (Transporte) viáticos del menor a cumplir citas y tratamientos en ciudad diferente a Purificación (Tolima). Es decir, para el despacho resulta evidente que la accionada ha cumplido con la atención que ha requerido el paciente **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, por cuanto ha tenido la atención necesaria a través de consultas médicas, en centros médicos especializados de la ciudad de Ibagué, a donde ha sido remitido o se le han dado las autorizaciones correspondientes, practicándosele los exámenes y tratamientos ordenados por el médico tratante.

De lo consignado por los médicos que lo han tratado, no se advierte ninguna omisión de la accionada. Además, el diagnóstico y las órdenes incluyen controles periódicos de conformidad con el criterio médico.

Sobre este aspecto ha sostenido la Corte Constitucional que: *“el juez de tutela debe ordenar el suministro de todos los servicios médicos que sean necesarios para conservar o restablecer la salud del paciente, cuando la entidad encargada de ello no ha actuado con diligencia y ha puesto en riesgo los derechos fundamentales del paciente siempre que exista claridad sobre el tratamiento a seguir, a partir de lo dispuesto por el médico tratante.*

Lo anterior ocurre, por una parte, porque no es posible para el juez decretar un mandato futuro e incierto, pues los fallos judiciales deben ser determinables e individualizables; y por la otra, porque en caso de no puntualizarse la orden de tratamiento integral, se estaría presumiendo la mala fe de la entidad promotora de salud, en relación con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones para con sus afiliados, en contravía del mandato previsto en el artículo 83 de la Constitución¹.

Visto lo anterior, en el caso bajo examen, la Sala encuentra que la pretensión invocada por la accionante no está llamada a prosperar, pues ni del material obrante en el expediente, ni de lo dicho por las partes en el trámite del amparo constitucional, se advierte que exista una negación a un procedimiento o tratamiento....., por lo que no es posible conceder el amparo invocado a partir de simples suposiciones sobre hechos futuros o con el fin de precaver hipotéticas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados por la accionante“ (Sentencia T-092/18).

Por lo anterior, este despacho no tomara ninguna decisión relacionada con el tratamiento integral en salud , por cuanto se encuentra acreditado en el expediente que al momento de tramitarse esta acción constitucional, la accionada **COMPARTA EPS-S** , le ha otorgado al paciente la atención necesaria a través de consultas médicas, tanto en el Hospital del Municipio de Purificación, como en centros médicos especializados de la ciudad de Ibagué, a donde ha sido remitido o se le han dado las autorizaciones correspondientes, practicándosele los exámenes y tratamientos ordenados por el médico tratante, atención que debe mantenerse, pues de lo contrario se podría incurrir en violación a sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud y la vida al paciente. Simplemente, no es viable tutelarlos en esta providencia, porque *“no es posible conceder el amparo invocado a partir de simples suposiciones sobre hechos futuros o con el fin de prevenir hipotéticas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados por la accionante (Sentencia T-092/18).*

La accionada COMPARTA EPS-S, solicitó en su respuesta a esta acción constitucional que, de ser procedente la acción de tutela, se autorice a COMPARTA EPS-S para solicitar el financiamiento de la totalidad de gastos en que incurra en cumplimiento del fallo de tutela, respecto a servicios y tecnologías que se encuentren fuera del plan de beneficios de salud, ante la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD- ADRES para que estos sean reconocidos y presupuestados de acuerdo a las resoluciones 205 y 206 de 2020.

No obstante, el despacho considera que este tipo de ordenes en materia económica y presupuestal escapan a su competencia en materia de tutela, por cuanto obedecen a trámites administrativos que debe cumplir la accionada de conformidad con las normatividades que rige este tipo de prestaciones en materia de salud y no requieren por lo tanto una orden judicial.

Además, este despacho ya ha decidido este tipo de peticiones en otras acciones de tutela, por lo cual es necesario tener en cuenta las razones para esas decisiones anteriores, que imponen el deber de mantener una línea igual en ese sentido, en aplicación del precedente judicial y de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, La Corte Constitucional ha establecido que:” *La jurisprudencia constitucional ha diferenciado, según su origen, dos clases de precedente: el horizontal y el vertical. Respecto al primero, se ha dicho que comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o **el mismo operador judicial**”*

(.....) La Corte también ha sido clara en determinar que, cuando el juez se enfrenta a tales ejercicios de interpretación, la autonomía judicial de la cual goza por mandato constitucional no es absoluta, dado que “un primer límite se encuentra en el derecho de toda persona a recibir el mismo tratamiento por parte de las autoridades judiciales” De esa manera, “la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad en la interpretación y la aplicación de la ley”

4.4. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la caracterización del desconocimiento del precedente, pretende garantizar la efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, pues el desconocimiento del precedente judicial “puede llevar a la existencia de un defecto sustantivo en una decisión judicial, en la medida en que **el respeto al precedente es una obligación de todas las autoridades judiciales, - sea éste vertical u horizontal-**, dada su fuerza vinculante y su inescindible relación con la protección de los derechos al debido proceso e igualdad”

4.5. **El precedente “se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues lo que busca es asegurar la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de decisiones judiciales que sean razonablemente previsibles.** Por su alcance se constituye en una herramienta de protección de la confianza legítima y la buena fe, en la medida en que proscribe el uso y la interpretación caprichosa de los elementos jurídicos aplicables por las autoridades judiciales al momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción. Además, no cabe duda de que el respeto a las decisiones anteriores también obedece a la guarda del principio de igualdad, el cual resultaría transgredido sí frente a casos idénticos se brinda una respuesta *dísímil*” (Sentencia SU113/18) (Resaltado fuera de texto)

Pues bien, en un caso similar al que nos ocupa (Accionante: Cecilia Penagos Hernández; accionada: compartá eps-s. rad 2020 – 00008-00 R.I: 6465; providencia de fecha 9 de febrero de 2021), este despacho negó esta misma solicitud hecha por la accionada COMPARTÁ EPS-S, con fundamento en la siguiente consideración. “ Obsérvese que en los mismo documentos aportados por la accionada en su respuesta a esta acción constitucional se puede leer a folio 37 , una comunicación suscrita por Amanda Vega Figueroa ,subdirectora de costos y tarifas de aseguramiento en salud de Minsalud, quien al referirse a los servicios sociales de alojamiento y manutención (factores determinantes de salud) que lleguen a requerir los afiliados del régimen subsidiado dice: “su financiación ya se encuentra considerada en el cálculo del presupuesto máximo de la EPS para la financiación de tutelas, según sus históricos, razón por la cual no hay lugar para la presentación de recobro alguno ante la ADRES”

Es decir, resulta claro que, esos servicios sociales sobre los cuales se debate en este caso en concreto, alojamiento y manutención, no pueden ser recobrados ante la ADMINSTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD- ADRES y mal podría este despacho expedir una orden en ese sentido.

En consecuencia, por estas razones, esta petición de la accionada se negará.

En resumen, se accederá al amparo solicitado en lo relacionado con los gastos de transporte y viáticos (alimentación-hospedaje) que requiera el menor **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, y los gastos de transporte y viáticos (alimentación- hospedaje) del acompañante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. - TUTELAR los derechos fundamentales a la Salud y Vida digna, del menor **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ**, con tarjeta de identidad No 1.110.466.706, hijo de **ANA VICTORIA RODRIGUEZ POLOCHE** identificado con CC No 28.893.183 expedida en Purificación, según la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - ORDENAR a **COMPARTA EPS- S** , para que en el término de 48 horas, proceda a ordenar el reconocimiento y pago del transporte y viáticos (alimentación - hospedaje) que a partir de la fecha de esta providencia, llegare a necesitar el menor **SANTI ESTEBAN ORTIZ RODRIGUEZ Y SU ACOMPAÑANTE**, cuando deba asistir a consultas, remisiones, hospitalización o cualquier o tratamiento médico que deba realizarse en la ciudad de Ibagué o en cualquier ciudad diferente al Municipio de Purificación, en donde estén ubicadas las instituciones adonde se remita o se le expidan las autorizaciones de servicio, en desarrollo de tratamiento que se requiera para las patologías o enfermedades que padece según la historia clínica en poder de la accionada **COMPARTA EPS-S** y/o de las instituciones que prestan sus servicios por autorización de la EPS –S.

TERCERO. - NEGAR la autorización solicitada por **COMPARTA EPS-S**, relacionada con el financiamiento de los gastos en que incurra en cumplimiento del fallo de tutela ante la Administradora de los recursos del sistema de seguridad social en salud –ADRES, por las razones ya expuestas.

CUARTO. - NOTIFICAR la presente providencia en la forma establecida en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

QUINTO. - De no ser impugnada la presente decisión, envíese el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La Juez,

Firmado Por:

GABRIELA ARAGON BARRETO
JUEZ
JUZGADO 001 MUNICIPAL PROMISCOU DE LA CIUDAD DE PURIFICACION-TOLIMA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **13bd8e7946b904e244b5af59927489d5650ac165ea5b599963edaa3af487dc4c**

Documento generado en 26/03/2021 03:43:38 PM